



1. ¿Qué comentarios tiene su entidad respecto al Proyecto de Ley 270 de 2025 Cámara de representantes?

En el marco del trámite legislativo del Proyecto de Ley No. 270 de 2025 Cámara, “por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993 que expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, la entidad reconoce como positiva la intención del legislador de actualizar y fortalecer el régimen de contratación estatal, particularmente en lo relacionado con el robustecimiento de los principios de transparencia, eficiencia, economía y responsabilidad. La iniciativa se orienta a optimizar la gestión de los recursos públicos, fortalecer los mecanismos de control y prevenir riesgos de corrupción, lo cual resulta consistente con los estándares contemporáneos de gobernanza pública y con la necesidad de modernizar los instrumentos contractuales del Estado. En esa medida, se identifica el proyecto como una oportunidad para introducir ajustes estructurales que permitan mejorar la eficiencia y trazabilidad de los procesos contractuales, así como su alineación con los objetivos estratégicos de política pública y desarrollo territorial.

Desde la perspectiva misional, se valora favorablemente la inclusión de disposiciones orientadas a fortalecer la participación de organizaciones comunitarias, campesinas y otras formas asociativas en los procesos de contratación estatal, en tanto estas permiten avanzar hacia un modelo de gestión pública más cercano a las realidades territoriales y con mayor apropiación social de los proyectos. Ello resulta armónico con las tendencias actuales de política pública orientadas al fortalecimiento de capacidades locales y a la promoción de esquemas de desarrollo con enfoque diferencial y territorial. No obstante, se advierte la necesidad de revisar la consistencia normativa de algunas de estas figuras, particularmente en lo relacionado con las Asociaciones Público-Populares, teniendo en cuenta desarrollos jurisprudenciales recientes que podrían incidir en su viabilidad jurídica, lo cual hace necesario ajustar el articulado para garantizar seguridad jurídica y coherencia con el ordenamiento vigente.

En lo que respecta a la introducción del principio preferente de ejecución directa por parte del Estado, así como a la restricción a la subcontratación en el marco de convenios interadministrativos, se identifican implicaciones relevantes desde el punto de vista funcional y operativo. En particular, para entidades cuya naturaleza se centra en la formulación de políticas, la planeación estratégica y la administración de recursos o fondos —en concordancia con las funciones establecidas para el sector en el Decreto 381 de 2012—¹, la ejecución material de proyectos, especialmente aquellos que demandan alta especialización técnica, se desarrolla a través de esquemas de delegación, concesión o articulación con terceros especializados.

¹ Colombia, *Decreto 381 de 2012*, “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía”, art. 3.



Así mismo, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015 respecto de las funciones de entidades como la UPME y el IPSE², la implementación de proyectos del sector supone la articulación con operadores y agentes especializados. En ese sentido, limitar la posibilidad de recurrir a estos mecanismos podría afectar la capacidad operativa institucional, generar riesgos de ineficiencia en la ejecución de proyectos y exigir una transformación estructural significativa en términos de fortalecimiento de planta de personal, adquisición de capacidades técnicas, dotación de infraestructura y ajuste de la estructura presupuestal.

Adicionalmente, resulta pertinente señalar que, en el marco de la regulación sectorial vigente, la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica, particularmente en Zonas No Interconectadas, se realiza mediante esquemas que contemplan la participación de operadores de red y agentes especializados, tal como lo establece el Decreto 1076 de 2015³. En ese sentido, la prohibición de subcontratación en convenios interadministrativos podría generar riesgos jurídicos y operativos, en la medida en que las entidades ejecutoras deberían contar con la capacidad instalada suficiente para asumir directamente la ejecución contractual; de lo contrario, se podrían presentar escenarios de nulidad absoluta de los contratos o paralización de proyectos hasta tanto no se garantice dicha capacidad, lo cual podría afectar la continuidad en la prestación de los servicios o la ejecución de inversiones estratégicas.

2. Bajo el modelo actual de contratación en la entidad, ¿cómo se desarrollan los desafíos y objetivos misionales propios y cómo alteraría la mencionada iniciativa legislativa el proceso de contratación?

En el marco del modelo vigente de contratación estatal, estructurado a partir de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios —particularmente el Decreto 1082 de 2015, que compila el régimen reglamentario del sector—⁴, la entidad desarrolla sus objetivos misionales mediante la implementación de procesos contractuales orientados a garantizar la provisión de bienes y servicios necesarios para la ejecución de políticas públicas, así como la articulación con actores territoriales, sectoriales e interinstitucionales. Dicho modelo se fundamenta en los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva, consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública⁵, los cuales orientan tanto la estructuración de los procesos precontractuales como la ejecución y supervisión contractual.

² Colombia, *Decreto 1073 de 2015*, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”, arts. 1.2.1.1.5 y 1.2.1.1.7.

³ Colombia, *Decreto 1076 de 2015*, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, art. 2.2.3.3.2.2.3.1.

⁴ Colombia, *Decreto 1082 de 2015*, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.

⁵ Colombia, *Ley 80 de 1993*, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.



En este contexto, la contratación constituye un instrumento operativo esencial para el cumplimiento de las funciones institucionales, particularmente en escenarios que requieren intervención territorial, coordinación multinivel y respuesta a problemáticas complejas. Sin embargo, en la práctica se evidencian desafíos estructurales asociados, en primer lugar, a la rigidez del marco procedimental derivado de la aplicación de las reglas de selección objetiva y estructuración de procesos previstas en la Ley 1150 de 2007 y desarrolladas reglamentariamente en el Decreto 1082 de 2015, que si bien buscan garantizar la legalidad y la competencia, pueden generar limitaciones en términos de oportunidad y capacidad de respuesta frente a necesidades emergentes o dinámicas territoriales cambiantes.

En segundo lugar, se identifican cargas administrativas significativas en la estructuración de los procesos, especialmente en lo relacionado con la elaboración de estudios previos, análisis del sector, definición de requisitos habilitantes y gestión documental, lo cual demanda capacidades técnicas especializadas y puede extender los tiempos de contratación.

Adicionalmente, la entidad enfrenta retos asociados a la adecuada planeación contractual —en concordancia con el principio de planeación previsto en la Ley 80 de 1993— y a la alineación de los procesos con los instrumentos de política pública y planeación estratégica, lo que implica garantizar coherencia entre los objetivos misionales, la disponibilidad presupuestal y los mecanismos de ejecución. A ello se suma la necesidad de fortalecer los esquemas de supervisión e interventoría, así como la gestión de riesgos contractuales, particularmente en contextos territoriales con condiciones diferenciales, donde la ejecución contractual puede verse afectada por factores institucionales, sociales o de seguridad.

Considerando lo anteriormente mencionado, la iniciativa legislativa en trámite, orientada a modificar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendría la potencialidad de incidir de manera directa en los procesos contractuales de la entidad. En particular, de acuerdo con el alcance de las disposiciones propuestas, podrían generarse transformaciones en aspectos como la flexibilización de los procedimientos de selección, la simplificación de etapas precontractuales, la redefinición de los esquemas de responsabilidad y la incorporación de nuevos instrumentos o modalidades contractuales. Precisamente, estos cambios podrían contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión contractual, reducir tiempos de estructuración y adjudicación, y facilitar la implementación de mecanismos más ágiles y adaptativos, especialmente en escenarios que demandan respuestas rápidas y focalizadas.

No obstante, también se identifican posibles implicaciones que requieren un análisis detallado, particularmente en lo relacionado con la preservación de los principios de transparencia y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y desarrollados en la Ley 1150 de 2007, la garantía de condiciones de competencia efectiva entre oferentes y la mitigación de riesgos asociados a la discrecionalidad en la toma de decisiones contractuales. En este sentido, una eventual flexibilización excesiva de



los procedimientos podría generar tensiones con los mecanismos de control y supervisión, así como con los estándares de integridad y lucha contra la corrupción.

De igual forma, la implementación de los cambios normativos propuestos implicaría ajustes institucionales relevantes, tanto en términos de capacidades técnicas como de adaptación de los procesos internos, sistemas de información y lineamientos operativos definidos en el marco del Decreto 1082 de 2015. Precisamente, esto supondría la necesidad de desarrollar estrategias de fortalecimiento institucional, capacitación del talento humano y actualización de manuales y procedimientos, con el fin de garantizar una adecuada apropiación del nuevo marco normativo y su aplicación efectiva en los procesos contractuales.

En consecuencia, si bien la iniciativa legislativa podría representar una oportunidad para modernizar y hacer más eficiente el sistema de contratación estatal, su impacto en la entidad dependerá en gran medida del equilibrio que logre entre la agilización de los procesos y el mantenimiento de los principios que rigen la función administrativa. Resulta fundamental que cualquier modificación al régimen vigente preserve la seguridad jurídica, fortalezca los mecanismos de control y contribuya efectivamente al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en particular aquellos relacionados con la garantía de derechos, la implementación de políticas públicas y la atención de las necesidades territoriales.

3. ¿Cuál es el valor total de los contratos en 2024 que licitan, contratan o concesionan con privados? Detallar en archivo en formato Excel.

Como se evidencia a continuación, los procesos de contratación con personas jurídicas de naturaleza privada para la vigencia 2024 evidencia la suscripción de 43 contratos a través de diversas modalidades, de los cuales 19 contratos son de cuantía mínima, seguida por el concurso de méritos abierto con 10 contratos, la selección abreviada por subasta inversa con 8 contratos, selección abreviada de menor cuantía con 2 contratos y la selección abreviada por acuerdo marco de precios con 4 contratos, lo cual da cuenta de una estrategia institucional que combina mecanismos ágiles para la atención de necesidades operativas con procesos orientados a la contratación de servicios especializados; desde el punto de vista financiero, se identifica una alta dispersión en los valores contractuales, desagregado por modalidad de contratación de la siguiente manera:

- Concurso de méritos abierto: \$1.391.010.592.00
- Mínima cuantía: \$ 987.464.831.00
- Selección abreviada de menor cuantía: \$1.531.256.713.00
- Selección abreviada por subasta inversa: \$12.945.854.406.00
- Selección abreviada de acuerdo marco: \$3.285.028.701,18.

Esto permite inferir un esquema dual de contratación en el que, si bien predomina en número la contratación de menor cuantía, el grueso de los recursos se concentra



en pocos contratos de carácter estratégico, configurando así una estructura contractual que articula eficiencia operativa con la ejecución de iniciativas de mayor impacto y complejidad.

CONTRATACIÓN CON PRIVADOS 2024			
Numero Contrato	Modalidad Contratación	Proveedor	Ultimo Valor
CAO-0001-2024	MINIMA CUANTIA	RECIO TURISMO S.A.	\$ 130,000,000.00
CAO-0002-2024	MINIMA CUANTIA	LUPA JURIDICA S.A.S.	\$ 47,372,000.00
CAO-0003-2024	MINIMA CUANTIA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$ 24,804,540.00
CAO-0004-2024	MINIMA CUANTIA	C.I. QUALITY TRADE LTDA	\$ 37,634,847.00
CAO-0005-2024	MINIMA CUANTIA	GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS	\$ 31,631,222.00
CAO-0006-2024	MINIMA CUANTIA	SISTEM DIRECT S.A.S	\$ 3,805,113.00
CAO-0007-2024	MINIMA CUANTIA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$ 39,203,226.00
CAO-0008-2024	MINIMA CUANTIA	INTEGRALES SAS. RIDA SOLUCIONES	\$ 22,800,000.00
CAO-0009-2024	MINIMA CUANTIA	DINA ENERGY S.A.S	\$ 64,527,749.00
CAO-0010-2024	MINIMA CUANTIA	GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. BIC.	\$ 38,229,936.00
CAO-0011-2024	MINIMA CUANTIA	INGTECNOVA S.A.S	\$ 50,092,365.00
CAO-0012-2024	MINIMA CUANTIA	BALKON S.A.S	\$ 50,575,500.00
CAO-0014-2024	MINIMA CUANTIA	INDUSTRIAS FLER SAS	\$ 109,155,200.00
CAO-0015-2024	MINIMA CUANTIA	CAR SCANNERS SAS	\$ 136,908,204.00
CAO-0016-2024	MINIMA CUANTIA	GRUPO IYUNXI SAS	\$ 82,745,480.00
CAO-0017-2024	MINIMA CUANTIA	KEY MARKET S.A.S	\$ 27,877,649.00
CAO-0018-2024	MINIMA CUANTIA	BVQI COLOMBIA LTDA.	\$ 22,491,000.00
CAO-0019-2024	MINIMA CUANTIA	EXTINTORES FIREXT SAS	\$ 3,791,000.00
CAO-0020-2024	MINIMA CUANTIA	RIAÑO DIAZ CONSTRUCCIONES SAS	\$ 63,819,800.00
GGC-0554-2024	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	\$ 556,392,810.10
GGC-0569-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	NOVATOURS LTDA	\$ 4,322,877,145.00



GGC-0579-2024	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	UT SOFT IG 3	\$ 1,802,729,248.18
GGC-0643-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	B2B TIC S.A.S.	\$ 1,150,000,000.00
GGC-0969-2024	SELECCION ABREVIADA / MENOR CUANTIA	BIBLIOWEB SAS	\$ 825,051,910.00
GGC-0989-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	SVAIT SAS	\$ 466,983,000.00
GGC-1116-2024	SELECCION ABREVIADA / MENOR CUANTIA	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	\$ 706,204,803.00
GGC-1122-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO INT OXI 203	\$ 0.00
GGC-1123-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO INT OXI 203	\$ 0.00
GGC-1124-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO INT OXI 203	\$ 0.00
GGC-1125-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO INT OXI 203	\$ 0.00
GGC-1127-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO INT OXI 203	\$ 0.00
GGC-1128-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	UNION TEMPORAL OXI 2024	\$ 0.00
GGC-1134-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO ENERGY24	\$ 246,401,400.00
GGC-1137-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO NUCLEAR VALJER - OPTIM 2024	\$ 703,850,288.00
GGC-1169-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	DATASEC S.A.S.	\$ 615,441,000.00
GGC-1180-2024	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	\$ 699,643,327.90
GGC-1242-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	PROINSO S.F. S.A.S.	\$ 273,308,292.00
GGC-1266-2024	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	CONSORCIO INFRAVERDE	\$ 167,450,612.00
GGC-1308-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	UNIÓN TEMPORAL MIN MINAS 2024	\$ 2,523,022,649.00
GGC-1310-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	WEXLER S.A.S	\$ 999,590,562.00
GGC-1311-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	UNIÓN TEMPORAL MIN MINAS 2024	\$ 2,721,526,430.00
GGC-1328-2024	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	DISTRACOM S.A.	\$ 226,263,315.00
GGC-1332-2024	SELECCION ABREVIADA / SUBASTA INVERSA	DGERARD MG S.A.S.	\$ 146,413,620.00
TOTAL			\$ 20,140,615,243.18



4. Realice una proyección presupuestal y temporal sobre cuándo y cómo la entidad podría adoptar los cambios propuestos en la iniciativa legislativa ya descrita.

En relación con la solicitud de proyección presupuestal y temporal para la adopción de los cambios propuestos en la iniciativa legislativa, se precisa que, cualquier proyección presupuestal y temporal sobre la adopción de los cambios propuestos exige contar previamente con instrumentos técnicos que permitan determinar el impacto real de la iniciativa sobre las competencias, capacidades instaladas, estructura administrativa, procesos contractuales y recursos requeridos por la entidad. En particular, medidas como la ejecución directa preferente, las restricciones a la subcontratación, la modificación de procedimientos contractuales y la eventual necesidad de fortalecer capacidades técnicas u operativas podrían implicar ajustes institucionales cuya valoración requiere estudios específicos de impacto normativo, fiscal, presupuestal y organizacional.

Conforme a lo anterior, en esta etapa del trámite legislativo, **la entidad no cuenta con los insumos técnicos, operativos ni presupuestales suficientes que permitan efectuar una estimación sobre los costos asociados a la implementación del proyecto de ley, ni sobre los tiempos requeridos para su implementación.** Lo anterior, considerando que, conforme al Decreto 381 de 2012, el Ministerio de Minas y Energía tiene a su cargo funciones de formulación, adopción, dirección y coordinación de políticas, planes y programas del sector minero-energético y no contamos con los insumos técnicos suficientes que nos permitan realizar las proyecciones solicitadas.